



Observatorio sobre políticas públicas y reforma estructural

Informe N° 16

Tarifas, ruidazo y movilizaciones

Por Agustina Gradin

Introducción

Desde la primera semana de Enero de 2019 asistimos a una multiplicación de protestas que expresan el malestar social frente al nuevo aumento de las tarifas de servicios públicos, las naftas y el transporte, en el marco de un calor agobiante, casi tanto como la temperatura de la inflación de los alimentos y demás precios de la economía.

Los “ruidazos”, etapa superior de los “cacerolazos”, que buscan ampliar la convocatoria a la “ciudadanía en general”, unifican diferentes reclamos y demandas que tienen como igual denominador la crítica al modelo económico y social del gobierno de Cambiemos. Sin entrar en detalle sobre el impacto económico de los tarifazos en las economías cotidianas de cada familia argentina resumidas en el reclamo de que “no llegamos a fin de mes”, nos interesa profundizar la mirada en las acciones colectivas de protestas y en las articulaciones sociales y políticas que surgen de las mismas. Los ruidazos emergen en un marco de conflictividad social en aumento, con actores movilizados por demandas sectoriales como la economía popular o los gremios docentes, ambos en franca resistencia frente a las políticas neoliberales del gobierno macrista. Pero también suceden en un escenario de notable ausencia de la CGT y sus representantes en la defensa de los intereses de la clase trabajadora, la cual es una de las principales víctimas de los tarifazos en particular y del ajuste estructural de la economía en general. Un elemento significativo es el rol de la oposición legislativa y de los intendentes en relación a las tarifas y en su capacidad de imponer un límite concreto al avance de las políticas de ajuste. Las diferentes acciones coordinadas en relación a este tema, como las redes multisectoriales, los amparos colectivos y los intentos de sancionar leyes que retrotraigan el costo de las tarifas, son estrategias de unidad que permiten poner un freno efectivo al gobierno de

Mauricio Macri. Y a su vez, instalan en el debate público la necesidad de comprender a los servicios públicos como un derecho humano, un bien común fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad. El acceso a la energía, al agua y al transporte público dista mucho de ser “un lujo” como se quiere instalar desde el discurso oficial, y se constituyen en un derecho fundamental de cada ciudadano y ciudadana.

Algo claro en todo esto, y es que los principales actores políticos y sociales están apostando a una salida institucional y progresiva de la crisis, lo cual es una diferencia sustantiva con el escenario del 2001. Si bien la conflictividad ha ido en aumento, y es esperable que siga creciendo en este contexto económico y social, el debate está quizás en cuáles son las propuestas y las alianzas que logren canalizar tras de sí todo este descontento con el gobierno de Mauricio Macri. Es decir, ¿cuál es la salida política de este ciclo de movilizaciones?

Nuevo ciclo de movilización

Como ya señalamos en diferentes informes de nuestro [Observatorio en Políticas Públicas y reforma estructural](#), la protesta en nuestro país ha aumentado sustancialmente desde la asunción del actual gobierno. Las demandas y reclamos de la sociedad civil se han hecho escuchar masivamente en varias oportunidades durante estos años. Desde las demandas sindicales y de la economía popular, a las demandas de las mujeres y los feminismos, hasta el sistema educativo y los reclamos por el ajuste del Estado, la heterogeneidad de los actores que protestan ha sido un constante durante este tiempo. Ahora bien, estos actores y sus demandas no son nuevos, sino que cuentan con una vasta trayectoria y experiencias. Sin embargo, las políticas de ajuste estructural y la política de tarifas de los servicios públicos en un marco económico de recesión abrieron el escenario para la emergencia de una nueva demanda, y a su canalización a través de diferentes formas de protesta. La potencia de esta radica, quizás, en que recoge el descontento de una parte importante de la sociedad, y dentro de ella, de una parte de los propios votantes del “cambio”.

Los “ruidazos” expresan una demanda transversal de diferentes sectores sociales, a pesar de estar principalmente asociados a las clases medias (así de amplio conceptualmente). Trabajadores, Jubiladxs, comerciantes, profesionales, centros deportivos y/o comunitarios, entre muchos otros perciben los tarifazos como una expresión de la injusticia económica y social del proyecto neoliberal. Esta demanda, a su vez, evidencia la desigualdad estructural de la lógica económica de Cambiemos, y se constituye en una de sus contradicciones actuales ya que el propio modelo de

acumulación de capital basado en las empresas energéticas supone una brutal transferencia de ingreso de los consumidores a estas grandes empresas. Y este aumento del peso relativo de las tarifas en la vida cotidiana es una mecha que potencia la bronca social y el descontento. La insensibilidad social que expresan las medidas de gobierno genera mayor desesperanza en torno a la efectividad de las protestas. Y esta desesperanza esta nutrida por el proceso de desgace de derechos sociales y de las menguadas protecciones del Estado Argentino, llevado adelante por la tecnocracia macrista.

En este escenario, el formato de acción colectiva denominado “ruidazo” (aún asociado a las protestas de los cacerolazos durante el menemismo, pero principalmente durante el 2001/2002) condensa la experiencia realizadas desde las asambleas ciudadanas de 2001 hasta las diferentes protestas realizadas durante el kirchnerismo y lo que va del Macrismo. No son novedosas en términos de formato, pero es llamativa su capacidad de sostenimiento en el tiempo, similar (pareciera por ahora) a lo que fueron los viernes de cacerolazos durante los primeros meses del gobierno interino de Eduardo Duhalde. No es un dato menor la capacidad de repetición de las acciones colectivas, aún con diferentes niveles de convocatoria. La capacidad de mellar el consenso político con los oficialismos es una característica que todos los gobiernos han experimentado. ¿Podríamos decir que hay algunos puntos en común con las movilizaciones de las clases medias durante el último mandato de Cristina Fernández? Seguramente una parte de los y las protagonistas de aquel ciclo de movilizaciones, del cual el “cambio” fue su emergente político, acompañan el reclamo actual por las tarifas. Hay aprendizaje en la acción colectiva, y obviamente, hay trayectorias, experiencias y expectativas. Todo esto se condensa en un ciclo de movilización que si bien tienen formatos de acción colectiva más característicos que otro, también se hilvanan con otras formas de protesta que también se expresan en el espacio público. Las filas de consumidores en las oficinas de las empresas, las conversaciones y protestas en voz alta en los medios de transporte, los cortes de calle, la quema de gomas en plena ciudad de Buenos Aires, los ataques a las cuadrillas técnicas de los servicios, entre muchos otros, forman parte de este entramado de acciones y demandas.

Ahora bien, esta “expresión ciudadana” dista mucho de ser auto convocada, sino que es iniciativa de la oposición política y social que leyó acertadamente el escenario. A su vez recoge las experiencias realizadas por las organizaciones de consumidores, un activo muy importante de la sociedad civil Argentina. También los clubes deportivos y los espacios culturales y sociales son actores importantes en este conflicto. Desde diferentes lugares de legitimidad social por su rol comunitario y con la capacidad de sensibilizar al conjunto de la sociedad, sus acciones de protesta son momentos combativos del ciclo de protesta que ayudan a visibilizar la demanda, potenciando el reclamo. Este abanico

heterogéneo de protagonistas del conflicto debe ser leído, a nuestro entender, como una potencia de la demanda que tiene la capacidad de aglutinar tras de sí a quienes en muchos otros aspectos no encuentran consensos mínimos para la unidad en la acción (ni pensar en lo político).

Por otro lado, cabe destacar que las movilizaciones, cortes de calles y ruidazos fueron impulsadas territorialmente por diferentes representaciones sociales y políticas, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, pero también en diferentes ciudades y localidades del interior del país. Esto expresa un sesgo local y comunitario de los conflictos, pero que se articula de abajo hacia arriba a partir de la demanda que unifica las diferentes acciones. El carácter federal del ruidazo es un elemento sustantivo de esta nueva ola de protestas, que claramente desanda el argumento de la aumento de tarifas como un problema de la clase media urbana. Este entramado organizacional que precede, sustenta, y garantiza los ruidazos en diferentes puntos del país, se ve legitimado por la capacidad de convocatoria que generan en los vecinos y vecinas de los diferentes barrios del país. El calor y los cortes de luz sistemáticos, hacen su parte.

Este carácter de federalismo desde abajo (lo comunitario) hacia arriba (lo nacional), es una característica que merece atención, sobre todo de los gobiernos locales que tienen algún tipo de responsabilidad respecto de los servicios públicos. Los municipios, que son la primera trinchera frente a los conflictos sociales, se encuentran frente una nueva agenda de demandas que no se resuelve con planes sociales. De hecho, una parte de los y las Intendentes de la Provincia de Buenos Aires ha tomado la iniciativa interponiendo un recurso de amparo para que no se apliquen los tarifazos a los habitantes de la provincia. Y esto es interesante para analizar el famoso vínculo entre “el palacio y la calle”. La articulación de la protesta social con la política partidaria no es ninguna novedad, aunque como se dijo en varias oportunidades, la permeabilidad de la política legislativa con las demandas de la sociedad civil movilizadas es una característica de estos últimos años. Lo vimos con el debate por la reforma previsional, que si bien no logró frenarla, si interpuso un límite a las otras reformas estructurales que en su momento el oficialismo quería instalar. Por ejemplo, la reforma laboral sigue en agenda pero no logra sortear este proceso. Del otro lado, la ley de interrupción voluntaria del embarazo también mostro esta misma capacidad y sus límites también.

Ahora bien, la demanda por las tarifas de los servicios tiene la potencialidad de convocar como mostramos a todo el arco político y social, desde las organizaciones de defensa del consumidor, las organizaciones vecinales, los movimientos de la economía popular, organizaciones de pequeños productores, los gremios hasta las organizaciones de derechos humanos, los partidos políticos, etc. En un año electoral como el 2019 esto tiene

el condimento de permitir el encuentro de todo el arco opositor tras una misma consigna. Si bien la “unidad” difícilmente se articule a partir de un solo reclamo, si puede ser un punto de partida. La masiva movilización de la economía popular del día 13 de febrero fue un botón de muestra de esta capacidad. Además de la cantidad impresionante de personas que se expresaron en la ciudad de buenos aires y en diferentes ciudades del interior del país, estas fueron acompañadas por un variopinto abanico de representantes de otros espacios sociales y políticos. La articulación en la calle y en la protesta, genera esperanzas. La capacidad política de construir consensos y alternativas es todavía una quimera.

Y en este sentido, así como los feminismos han logrado instalar sus agendas en el sistema de partidos obligando a todas las organizaciones a incorporar sus demandas y reclamos en sus discursos y programas, los ruidazos obligan al sistema político a discutir cuestiones estructurales del modelo económico neoliberal. A pesar de los intentos macristas de organizar la disputa electoral a partir del clivaje “transparencia - corrupción”, recurriendo al voto emocional y de confianza, la cuestión económica se cuelga por la ventana a partir de la movilización social. Es fundamental para la oposición mostrar propuestas de salidas viables, que representen y canalicen este proceso de movilización política y social, y que expresen otro modelo de país y de sociedad.

Algunas reflexiones finales

En primer lugar, los “ruidazos” y nuevo ciclo de movilización socio político en el cual se inscriben tienen la capacidad de mellar los consensos construidos por el discurso macrista en cuanto a los beneficios del “cambio” de modelo económico. Como demanda tienen la capacidad de poner en evidencia la desigualdad estructural de la economía neoliberal, y disputar por lo tanto el sentido ético del desarrollo así como la necesidad de avanzar en un modelo productivo inclusivo que garantice a todas y todos los ciudadanos el derecho humano de acceso a los servicios públicos con tarifas justas.

En segundo lugar, la capacidad de la demanda de contener y expresar una serie de reclamos, encadenando tras de sí problemáticas como el aumento de precios en general, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, los ajustes en la educación y en la salud, en las prestaciones como el PAMI o de los programas sociales, entre otros, permite pensar en la potencialidad de la misma para facilitar la unidad en la acción de diferentes actores y sectores sociales. Y paralelamente, interpela a otros actores, gremiales sobre todo, que todavía no han aparecido con fuerza este año en el actual escenario de conflictividad. Es de suponer que el tarifazo sea un elemento que

aparezca en las negociaciones paritarias que ya comenzaron con la paritaria docente en ciudad y provincia de Buenos Aires. Si bien la CGT no se ha expresado respecto a este tema a través de comunicados o de movilizaciones hasta ahora, diferentes sindicatos sí han participado activamente en los hechos de protesta que se condensan en el “ruidazo”. La CTA en sus dos versiones, la Corriente Federal y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con diferentes intensidades, participan de este proceso.

Por último, la potencia de este tipo de acciones de protesta para frenar las políticas neoliberales se puso sobre la mesa con la experiencia en la ciudad de Buenos Aires de las escuelas nocturnas. Sin embargo, en general la respuesta oficialista a la protesta social va de la indiferencia a la represión. Son quizás aquellos actores institucionales como la oposición legislativa o los gobiernos locales, quienes ponen trabas efectivas a las iniciativas gubernamentales de profundizar el ajuste. Esta articulación vertical entre la calle (la protesta), el congreso (la política legislativa) y los gobiernos locales (la política territorial) es una esperanza que entusiasma a quienes consideramos que es necesario transformar esta realidad que vivimos. Las tarifas de los servicios públicos deben ser un tema de agenda de la campaña electoral del 2019, y esperamos sean un articulador de la unidad de la oposición política y social a este gobierno del neoliberalismo tardío.

Febrero de 2019